

LA TRADICION AUTORITARIA

JOSE OVIEDO

**Hay libertad cada vez que hay un
hombre libre. Cada vez que un
hombre se atreve a decir No al Poder.
Octavio Paz**

Por lo menos hasta 1965, la historia del partidismo dominicano no fue sino la historia de la fragmentación, el autoritarismo y la personalización del Poder. Santana, Báez, Lilís, Mon Cáceres, Jimenes, Horacio Vásquez, Trujillo: todos ellos nombran una tradición, todos ellos son la punta del iceberg en una larga secuencia de luchas y caudillos.

La guerra civil de 1965 es, en este siglo, la expresión más alta de la no estructuración de un sistema político estable basado en la representación, la participación, la canalización institucional del conflicto, la ley y el pluralismo.

Para el siglo XIX, la pérdida de España fue la ausencia del Padre.¹ De ese supra-Estado que actuaba como precaria cohesión de nuestra colectividad, como fuerza ordenadora que, a pesar de sus fisuras y límites, trazaba los modelos de la producción, la política y la cultura, esto es, delineaba la identidad colectiva.

Desde fines del siglo XIX, y a través de todo el siglo XX dominicano, el tortuoso proceso de formación y reestructuración del Estado, ha estado directamente permeado por esta tarea: restaurar la imagen del Padre, construir una autoridad política. Lilís, Trujillo y Balaguer constituyen las principales épocas y símbolos "exitosos" de una tradición que se presenta como moderna: unificar una sociedad fragmentaria a través del autoritarismo.

No puede hacerse, hoy y desde una perspectiva crítica, una historia política de la sociedad dominicana, sin atrevernos a nombrar lo que tantas veces ha sido innombrable. La política, en esta historia que llamamos República Dominicana, ha oscilado siempre entre la unidad basada en el principio de autoridad y del jefe, y la reproducción de una división permanente.

Un autor norteamericano, Ronald Newton,² lo ha escrito: la fragmentación no es, en ningún sentido, un sistema. Y no sólo los grandes caudillos, sino también las dos grandes intervenciones militares de este siglo, persiguen, precisamente a través del autoritarismo, construir un orden, organizar un sistema político.

No es éste, sin embargo, el único lado oscuro de la luna. Porque no podría explicarse la recurrencia del autoritarismo, sin examinar -aunque aquí apenas lo mencionaremos- el repetido fracaso del liberalismo. Digamos, todavía, que por lo menos hasta 1965, todos los intentos de construir un sistema político liberal o democrático liberal han culminado en el fracaso.

Santana/Báez, Liliís, Ramón Cáceres, la intervención norteamericana, Trujillo... épocas autoritarias que operan frente a la imposibilidad del liberalismo de superar la fragmentación política y construir un orden político duradero.

La inquietante pregunta que nos plantea nuestro presente es hasta dónde la práctica política, las formas de hacer política de los partidos dominicanos de la postguerra, se ha dirigido o se dirige a alterar sustancial, radicalmente, las rutas de ese pasado. O si, por el contrario, sus prácticas, sus formas de hacer política, renuevan los ecos de una vieja historia.

La tradición del caudillo

La emergencia del caudillo como figura central de la política, está unida a la estructuración del poder político sobre la base, no del capital, sino de la propiedad de la tierra. El caudillismo constituye y se constituye en una cultura política rural.

En la República Dominicana, la multiplicidad de caudillos propia del siglo XIX y el pre-trujillismo del siglo XX, correspondió a la multiplicidad y heterogeneidad de las propiedades agrarias. Aun cuando la ideología liberal tiene su principal fundamento en la región del Cibao, estando ligada a la emergencia de las relaciones mercantiles, el liberalismo, en la República Dominicana, jamás pudo ser un sistema político. La fragmentación de la propiedad y el poder constituyó la política como una lucha permanente "por la distribución del poder-propiedad".³

Si bien es cierto que la guerra de Restauración, en la década de 1860, introdujo una mayor identidad ideológico-simbólica en tor-

no a la idea de nación, ligada a la constitución de los grupos del Cibao como sujetos de acción política, también lo es que la exigüidad del excedente y la estructura fragmentaria de la propiedad precapitalista de la tierra no sólo impidieron la unificación en el Estado y la formación del Estado moderno, sino que estructuraron el "partido azul" no como una forma política moderna, sino como un sistema extremadamente inestable de solidaridades particularistas.

La permanente crisis de las alianzas se relaciona con la existencia de la guerra como "mediación" fundamental de las relaciones políticas. Hacia afuera de su poder-propiedad, el caudillo es el maestro de la guerra, su poder se vehiculiza y legitima a través de su experiencia militar personal. La política es la prolongación de la guerra, y más aún, guerra y política se confunden.⁴

Hacia adentro, el poder aparece como la prolongación política de la persona del caudillo. El poder está basado no en la ley, sino en la arbitrariedad del jefe. El caudillo es el Padre. Y, como el Padre, es ambiguo: protege y castiga.

Frente a la fragmentación que caracteriza esta tradición, la unificación del Estado y la Sociedad, que Lilís y Mon Cáceres intentan, que la intervención norteamericana de 1916 estructura parcialmente, y que el trujillismo modela con éxito extraordinario constituye un discontinuo proceso de centralización estatal que no está, sin embargo, articulado a la extensión de la ciudadanía ni a la construcción de la democracia. La modernización de la política, cuyo eje es aquí la centralización, se realiza bajo las formas del autoritarismo y, en el extenso período trujillista, del totalitarismo.

Empero, no puede confundirse ese autoritarismo con otros autoritarismos ligados a la constitución como sujetos de acción política de las clases modernas (entre los cuales, el peronismo, en América Latina, es un símbolo muy preciso). Se trata del autoritarismo que emerge en una sociedad en la que el capital (transnacional) y su fuerza de trabajo están segregados, y en la que, por tanto, no se han desarrollado las clases sociales modernas.

No son la impersonalidad del capital, la figura del empresario, ni tampoco la fuerza abstracta de la burocracia y los políticos profesionales, las figuras dominantes de este proceso. El régimen político expresa la sociedad en que se constituye. Aquí la autoridad política procede de otra tradición y de otra realidad social. De la tradición de la Iglesia y el Colonizador, cuyo modelo político está basado en la jerarquía, la obediencia y la exclusión, en la muerte de los indios y la esclavitud de los negros. De la realidad del patrón, el jefe militar, el terrateniente. Son esos los modelos absolutos de la autoridad y la política.

De ahí que la centralización estatal no evacúa, sino que inte-

gra de manera conflictiva, y en un continuum con la cultura política de una sociedad rural, el sistema de clientelismo, prebendas y personificación del poder que a ésta le es característico.

La práctica de los caudillismos triunfantes es ambigua. Se trata de eliminar la fragmentación caudillista, de "superar" los caudillos, a través del propio caudillismo. Se trata de que no existan más los caudillos, sino El Caudillo. La centralización está unida intensamente a la construcción del mito, cuyo máximo modelo es Trujillo, y que configura una forma de legitimación no democrática del poder, basada precisamente en la cultura política rural.

La centralización estatal se articula con la soberanía del déspota, con la constitución del sistema político vertical basado menos en la participación que en la obediencia, menos en la ley que en la soberanía del déspota. La centralización se verifica en una no delimitación de lo público y de lo privado que algunos autores sitúan como "privatización de lo público y politización de lo privado".⁵

Esta es la forma contradictoria en que se unifican tradición y modernidad, o mejor, la manera en que la modernización se realiza dentro de los límites de la tradición.

Y es que la centralización estatal no obedece a la lógica de un movimiento social o de importantes grupos nacionales de poder que se unifican en el Estado. En la República Dominicana de principios del siglo XX el impacto del capital transnacional sobre la producción azucarera y sobre el Estado ha cortado la posibilidad de expansión de una economía agroexportadora nacional y, con ello, la formación de importantes grupos nacionales de poder. No son estos grupos, ni es la sociedad civil, los que conquistan y se unifican en y a través del Estado, los que constituyen su propia unidad política en la formación del Estado moderno.

La unidad del Estado se establece por "determinación externa",⁶ con la intervención de los Estados Unidos de 1916-24. Es el Estado el que conquista y unifica la sociedad. Y el modelo óptimo de ese estatismo lo fue el trujillismo.

Nosotros somos, pues, hijos del Estado. Nuestra modernización fue realizada absolutamente desde arriba y en continuidad con la tradición.⁷ El precio de esa modernización fue, entonces, su precariedad. Hemos vivido una modernización amordazada y, por tanto, castrada.

Y habría que decir aquí, que si es cierto que el régimen político expresa la sociedad en que se constituye, también lo es que el régimen político -especialmente si en él se unifica el pueblo-nación: tal es el caso de los treinta años del trujillismo- es un

"momento" esencial de la historia en que se conforma una sociedad. Todo el siglo XX dominicano está marcado por esa continuidad contradictoria que existe entre la tradición y la modernidad. Y esa continuidad tiene un eje, tiene un nombre que cruza la familia, la sociedad, el Estado. Se llama autoritarismo.

El Partido Dominicano, partido único

Estamos en 1933. El día: 30 de mayo. Encendemos la radio y el dial está colocado en HIX, la radiodifusora oficial. Entonces subimos el volumen para escuchar, fascinados: "Y luego, reformando todas las instituciones, reconstruyendo la capital de la República y a todo el país, sin tener que recurrir a préstamos, ha conseguido lo que para algunos hubiera sido una utopía y lo que actualmente algunos estadistas de los países más poderosos del mundo persiguen sin cesar, Hitler, por ejemplo, LA UNIFICACION DE TODAS LAS FUERZAS VIVAS DEL PAÍS EN UN SOLO IDEAL Y LA ELIMINACION DEL CACIQUISMO MEDIANTE LA ESPONTANEIDAD CIUDADANA". Esta es la obra más monumental que en país alguno puede hacer un gobernante".⁸

Frente a un pasado caracterizado por la fragmentación política, el trujillismo representa y constituye la unidad del pueblo-nación. La unificación de la sociedad y del Estado se cimenta en el fracaso del intento de estructurar un sistema de partidos en el período inmediatamente anterior. Ahora, la lucha contra el "caos" se organiza como una lucha por el orden, y esta lucha será "la continuación política de la guerra".⁹

La formación del Estado moderno, que profundiza y extiende sustancialmente las bases creadas por la intervención norteamericana de 1916-24, se estructura en torno a la unidad monolítica. Esto es, la unificación del pueblo y la nación se realiza a través de la formación de un sistema político monista.

Elemento central en la penetración del Estado en la sociedad (que es el propio proceso de constitución del Estado moderno), y por tanto, en la configuración de ese sistema político monista, fue la vertebración del partido único, el Partido Dominicano. Lo dominicano se identifica con el partido porque, como en todo totalitarismo, Estado y Sociedad se confunden.

La fundación del sistema político construye una dinámica de disolución y absorción de los demás grupos políticos organizados. Antes de 1930, la fragmentación, la multiplicidad de partidos; después de 1930, el reino del partido único. Esa disciplina organizativa, que forma parte de un disciplinamiento político general basado en la exclusión de toda oposición, reduce las formas de hacer política a un solo modelo.

De ahora en adelante, las organizaciones deben estar contruidas a imagen y semejanza del partido. Y el partido a imagen y semejanza del Estado, dentro del cual opera como uno de sus principales aparatos. El orden social es un orden jerárquico, basado en los principios de la autoridad y del jefe, el cual sintetiza la unidad absoluta de la nación. En este contexto, todas las organizaciones (nacionales, provinciales, universitarias, escolares, femeninas...) funcionan como correas de transmisión, o mejor, como efecto multiplicador de una única doctrina y de una única forma de hacer política.

En la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, Trujillo definió al Partido Dominicano como un "agente de civilización", como un "molde cívico para estructurar una nueva ciudadanía, depurada y libre de afiebrados credos políticos".

La primacía del poder militar, la exclusión de la participación plural y la soberanía popular, la privatización y personalización del Estado, configuran un sistema de poder centrado en la figura de Trujillo y, por tanto, basado en la soberanía del déspota. El "Generalísimo", el "Padre de la Patria Nueva", "El Jefe": ése es el Estado. El déspota representa la política y todas las organizaciones deben configurarse como su encarnación; de ahí el carácter vertical del sistema político, que se fundamenta en una participación obediente.

La formación de la mayoría en el sistema político se estructura a través del partido único y de sus organizaciones periféricas, de amplia penetración en la sociedad, las cuales, mediante una permanente ritualización y mitologización del Jefe, de una constante movilización y organización del pueblo, construyen su socialización política.

La represión, pero también la cooptación, se traduce en la desaparición de los partidos opositores en 1931. El Partido Dominicano, cuyo lema, Rectitud, Libertad, Trabajo, Moralidad, escribe las iniciales de Rafael Leonidas Trujillo Molina, funciona como un aparato político vertical, encargado de la dinámica de control, cooptación, vigilancia, personificación simbólica y educación política masiva, así en el Estado como en la sociedad.

En 1940, 1,712 suborganizaciones del PD, y entre ellas, 1,623 juntas seccionales, unifican a un pueblo nunca antes unificado. 2,976 actos en todo el territorio nacional, en la capital -Ciudad Trujillo- y en las provincias, en los más remotos parajes, construyen una cultura política que amplía, nacionaliza y profundiza la herencia colonial del autoritarismo, la tradición política hispana.

Frente a este poderoso aparato político, incluso la "oposición" debe presentarse como su encarnación. El 14 de noviembre de

1940, la Guardia Universitaria organizó un mitin de proclamación del nuevo "Partido Trujillista", del cual las Memorias del Partido Dominicano hablan en estos términos:

Esta nueva institución política (...) cuya principal finalidad es idéntica a la del Partido Dominicano (la de reconocer como único jefe supremo al Generalísimo Rafael L. Trujillo, Benefactor de la Patria (...)) tiene como principal objetivo el de realizar una depuración del elemento político contemporáneo.¹⁰

La selectividad y el funcionamiento del Partido Trujillista lo vertebran como una pieza de redundancia en el encuadramiento político del sistema trujillista. Lo inscriben también dentro de esa teatralidad que caracteriza a los regímenes autoritarios y que cumple cabalmente su objetivo: dramatizar el Poder magnificándolo.

En los ritos de la época, Trujillo es el gran mito político. Todos deben participar activamente en su adoración. Por lo que toda oposición es fatal y debe ser penalizada. Las minorías, así, no tienen derecho de existencia, porque ser diferente es ser anormal, y la disidencia, como la locura, ha de ser excluida.

La disciplina social y política del trujillismo sataniza toda oposición, identificada entonces con el caos y la fragmentación política de la historia anterior. La memoria del pasado es una memoria trágica, y el bienestar del presente está unido al derecho (de guerra) del déspota a exterminar toda oposición.

El saneamiento de la sociedad pasa por la eliminación de sus males. ¿Y qué mal puede ser peor que el del des-orden? El trujillismo caracteriza la oposición dentro de los "ilegalismos" del sistema jurídico," como parte constitutiva del derecho del déspota a ejercer el castigo. La cárcel, el crimen y el castigo construyen una disciplina política, una maquinaria de obediencia fundada en un sistema de gratificaciones y sanciones.

Los enemigos del progreso son los únicos que pueden estar en contra de Trujillo.

Así lo afirmaba la radio de 1935.¹² Toda oposición es perversa en sí misma. Por lo que debe ser cancelada. Dentro de esta razón de Estado, el crimen es, "de hecho", la soberanía del déspota sobre los cuerpos.

¿Cuáles son las formas de legitimación que extendieron este totalitarismo durante treinta años? Dos tradiciones se retoman, unifican y profundizan en la reproducción política del trujillismo: la cultura política rural y la herencia hispana.

Trujillo es el gran caudillo y la nación su gran hacienda. El Estado es su poder y su propiedad. Y su partido, un sistema de lealtades y clientelismo. La ideología hispánica es el mito funda-

cional de una oposición entre civilización y barbarie. La barbarie es negra y la nación debe ser unificada frente a Haití. Pero la barbarie también es política y puede ser disidente y "comunista". ¿No nos recuerda esta percepción de la realidad, este maniqueísmo de los buenos y malos, de un modo absolutamente dividido en dos, no nos recuerda, digo, el espíritu de la Inquisición?

Dejar de obedecer es situarse fuera de. La no obediencia es un ilegalismo. Y lo que no forma parte de la distribución funcional y jerárquica de la pirámide de poder, no debe tener sino el signo de la exclusión.

El trujillismo estructuró un profundo sistema de legitimaciones no democráticas en torno a estos parámetros. Pero su mayor legitimación fue su "obra". Como todo autoritarismo, el trujillismo fue economicista. Edificios, escuelas, puentes, medios de comunicación, avenidas, carreteras, esto es, condiciones generales de producción, medios de consumo colectivo... todos ellos ligados a la rotación y desarrollo del capital, al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, a la conformación del Estado y sus instituciones, a la reproducción del régimen político... Son éstas las figuras de la modernización que, ante los ojos del hombre común, y dentro de la integración del discurso de los intelectuales, aparecen como el sentido del progreso y la civilización.

El trujillismo, entonces, unificó al pueblo-nación en torno a una figura única y un sistema político monista, fundado en la exclusión de toda oposición. Construyó las formas de hacer política sobre la base de las gratificaciones y sanciones, del espíritu de lealtad propio del clientelismo. Congeló la política en un solo modelo, y a partir de él reprodujo, amplió y profundizó la cultura política autoritaria. Construyó no sólo el orden social y político, sino más aún, el orden de la conciencia.

Los partidos que han gobernado el post-trujillismo, ¿hasta dónde han cambiado esa forma de hacer política? ¿Cuál es su efecto modernizador y democratizador en la vida pública dominicana?

Los partidos: entre la modernización y la fragmentación

No es sólo que el régimen político expresa la sociedad que lo constituye, sino que el régimen político participa del proceso y del modo en que una sociedad se constituye a sí misma. Una sociedad no es un dato muerto, es una historia. Y en ese proceso que es la historia, las formas de hacer política cristalizan una cultura política.

Los partidos políticos de la postguerra, ¿han alterado y transformado la cultural del autoritarismo y la tradición del caudillo? ¿Hasta dónde han cambiado la fisonomía política dominicana ha-

ciéndola más democrática? A través del examen de los dos partidos dominantes del período 1966-1985, el Partido Reformista (PR) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), esbozaremos algunas respuestas.

Se ha dicho que el partido político es la organización distintiva de la política moderna.¹³ Y que, organizando voluntades colectivas en los procesos de masificación de la política, su desarrollo está unido a la constitución de las clases modernas en sujetos de acción política. Agregando las reivindicaciones y luchas en torno a la participación y la representación, los partidos modernos se inscriben de manera esencial en la construcción de un orden democrático. Institucionalizando los programas y proyectos, la rotación de las élites y el conflicto, los partidos configuran mediaciones fundamentales entre Estado y Sociedad.

Parte central de las luchas que caracterizan al post-trujillismo giró en torno a la estructuración de un sistema moderno de partidos políticos, esencial para la construcción de un orden democrático duradero, en tanto delinea las formas de hacer política sobre la base de la rotación, la representación y la participación, y no de la arbitrariedad del o de los jefes.

Este intento puede considerarse como la emergencia del partido moderno en la política dominicana, una vez los intentos anteriores estuvieron sometidos a límites insuperables. Los partidos del siglo XIX (recordemos a los rojos y azules del Sur y del Cibao) no fueron sino organizaciones inestables de alianzas basadas en el poder-propiedad. Expresaban, pues, el carácter de la sociedad en que surgieron, y no trascendían su fragmentación. Se unifican temporalmente en torno al caudillo y el poder-propiedad, excluyendo una dinámica basada en las ideologías, programas y en la participación colectiva. Eran parte constitutiva, pues, del proceso de privatización de la política y personalización del poder.

En la segunda década de este siglo, y durante la ocupación norteamericana, se verifica un intento -unido a la estrategia USA de unificación política de la sociedad y el Estado- de trascender la fragmentación política a través de la creación de un sistema de partidos modernos. Esta estrategia, sin embargo, terminaría en el fracaso.

Y es que el partido moderno se realiza dentro de condiciones históricas y sociales inexistentes en la sociedad dominicana de la época. Sus coordenadas son las de la configuración de las clases modernas como sujetos de acción política. Empero, en la sociedad dominicana de los años 20 no encontramos ni un "movimiento de unificación y organización de los sectores burgueses y demás sectores dominantes en fuerzas sociales más o menos homogéneas", ni

tampoco "un despliegue de los trabajadores y los sectores populares hacia su organización política".¹⁴

En realidad, la apropiación del principal eslabón del aparato productivo por parte del capital transnacional, los bloqueos para socializar y disciplinar la fuerza de trabajo y la constitución de una fuerza de trabajo de inmigrantes -entre otros aspectos problemáticos ligados a la formación del capital, al Estado y la relación salarial- restringieron los posibles espacios de constitución y reproducción de clases modernas nacionales.

El contexto general de la sociedad dominicana de la época es el de una intensa heterogeneidad y, más allá (o más acá) de la lógica del capital transnacional, el de un extenso precapitalismo en que la fragmentación propia de la pequeña propiedad cortocircuita la eclosión de partidos modernos.

Las resistencias y movimientos de la época, pese a su multiplicidad, no trascienden esa fragmentación, y no llegan a constituir "una presión hacia la democratización".¹⁵ De hecho, la crisis de la estrategia de modernización "desde arriba" de la política se corona, con el trujillismo que emerge en los años 30, con un encuadramiento vertical del campesinado, principal clase-apoyo y principal nutriente -en República Dominicana- de la cultura del totalitarismo, y particularmente de sus formas de legitimación no democráticas.

El período 1961-65 conforma el primer ciclo del post-trujillismo, cuando toda una extensa y profunda serie de resistencias y luchas constituyen una intensa presión hacia la democratización. Presión que sintomatiza la emergencia de clases modernas durante el trujillismo y las pulsiones que, en el proceso de "desmantelamiento" de la dictadura, éstas vehiculizan para su organización y conversión en sujetos de acción política.¹⁶ La guerra civil de 1965 expresa, precisamente, la aguda contradicción existente entre las luchas populares en torno a la participación, al sistema de partidos y al salario directo e indirecto, entre otros 'issues', y la continuidad autoritaria del Estado y una mayoría burguesa.

Es ése el teatro de constitución de los partidos modernos en República Dominicana. Aunque habría que establecer -e investigar- que la organización de las voluntades colectivas en este período, se constituye en una tensión entre agregación, masificación y fragmentación. La multiplicidad y división de los partidos y sindicatos así lo indica.¹⁷

Si en el contexto de esas luchas y de la guerra civil de 1965, el PRD se desarrolla como una de las principales formas de agregación de la voluntad popular, de esas resistencias y luchas; e, PR, por el contrario, emerge como partido de gobierno en 1966 en

tanto que parte constitutiva de una reestructuración autoritaria del Estado, como componente de la reconstitución de una autoridad política frente a las luchas y movimientos que la habían pulverizado.

El Partido Reformista o la unificación autoritaria

El balaguerismo (1966-78) conformó una fase de reestructuración autoritaria¹⁸ de las relaciones entre economía y política, de la relación entre Estado y Sociedad y, particularmente, de las relaciones entre las clases sociales. La desarticulación del movimiento popular, a través de una estrategia de des-institucionalización, y la unificación de los grupos dominantes por el Estado, se presentan como proceso de reconstrucción del orden como dominación.

La reconstitución del orden y la autoridad se establece mediante un disciplinamiento organizativo de los sectores urbanos, ligado a una estrategia triunfante de segregación y conversión de las masas urbanas en masa amorfa, así como a través de una recomposición autoritaria del campesinado como "clase apoyo" y de la reproducción y ampliación de la "mayoría silenciosa".¹⁹

El PR se estructura, pues, dentro de una maquinaria de exclusión de la participación colectiva que confiere una importancia central a la autoridad del jefe. Si, al decir de Summer Welles, los partidos de los años 20 no construyeron un orden que estuviera más allá de "un sistema de partidos políticos basado solamente en la personalidad de los líderes",²⁰ el PRD no se sitúa en un horizonte sustancialmente distinto. Por el contrario, presenta importantes formas de continuidad con la tradición del autoritarismo y el caudillismo.

El PR, más que como organización de la voluntad colectiva y la participación, funciona otorgando primacía al hombre sobre la organización. Funciona más como brazo de gobierno que como movimiento social. Y es que, dentro de la estrategia en que participa dicho partido, la sociedad debe despolitizarse, en el sentido colectivo del concepto, y la política debe concentrarse en el saber del iluminado.

La política es el monopolio del elegido, y sus seguidores deben constituirse como espejos de su autoridad. La vinculación partidaria se establece sobre la base de la autoridad carismática, y es a través de esos parámetros que se estructuran las formas de legitimación no democráticas que -en una red autoritaria y paternalista- encuadran al campesinado y a las masas urbanas "marginales".

La dirección del Estado se plantea como monopolio del saber político basado en la experiencia personal de Balaguer y el "anillo" gobernante. Sin embargo, estas formas de legitimación no demo-

crática no se estructuran únicamente en la relación con el campesinado y los grupos burgueses, sino en torno al líder carismático.

La burguesía acelera su constitución organizativa, pero no como sujeto de acción política, sino como empresariado. La política se estructura como monopolio del grupo gobernante a través de la separación entre lo público y lo privado. El empresariado emerge como tal en una serie de asociaciones que lo organizan como 'sector privado', pero su representación en el Estado es más personal que institucional (recordemos, vg., al Consejo Nacional de Desarrollo).

El Estado, no obstante, construye una evidente asimetría en la institucionalización de las clases sociales, al quebrar las organizaciones obreras y populares urbanas, organizando desde arriba al campesinado (con la "Reforma Agraria" de 1972), y crear el espacio económico y político para la organización corporativa del empresariado.

Esto quiere decir que el PR no opera ni como organizador de la participación democrática popular ni, en tanto que partido, en tanto que maquinaria organizativa y programática, como unificador político de la burguesía. Y es que la unidad del Estado se estructura alrededor de la autoridad carismática.

Estoy convencido, declara Balaquer, de que el país sólo tiene, en el futuro inmediato, una sola alternativa: unificarse en torno a una figura civil con suficiente arrastre popular o resignarse a que se repita el episodio de 1930.²

El sistema de poder balaquerista sitúa los nudos de poder en el poder ejecutivo y el aparato militar, y la centralización estatal restringe el impacto de los organismos de participación y representación (el Congreso, los partidos) para privilegiar la personalización de los mecanismos de toma de decisiones.

En este contexto, el PR no se desarrolla como un medio de institucionalización de la sociedad civil, sino como subordinación colectiva a la autoridad carismática, como un organizador de la obediencia. Así, el partido funciona como uno de los dispositivos que estructuran las formas de legitimación no democráticas, imbricándose con la "Cruzada de Amor" (organización de caridad que actúa sobre las masas "marginales" urbanas) y la "Reforma Agraria" (programa de repartición de parcelas y organización campesina desarrollado por el Estado).

Todos estos dispositivos funcionan como brazos del gobierno y como encarnaciones de la voluntad del líder. Y es que el "gobierno" operó de hecho como un partido, se colocó por encima de los partidos no para armonizar los intereses y la actividad de los cuadros permanentes de la vida y los intereses estatales y nacionales, sino

para disgregarlos, para separarlos de las grandes masas y tener una fuerza de los sin partido ligados al gobierno con vínculos paternalistas.²² En este contexto analítico se explica la subordinación del partido al anillo militar del Poder Ejecutivo y a la Cruzada de Amor. Y es que el funcionamiento del sistema político privilegia el sistema de lealtades personales y el clientelismo por encima de la representación política.

El Partido Reformista retoma la tradición de la unificación autoritaria, basada en la autoridad personal. Y, frente a las presiones democratizadoras de una sociedad civil en expansión, dado el intenso proceso de acumulación de capitales, modernización, urbanización de las masas y ampliación de las capas medias, la respuesta del líder carismático no será la de reestructurar las formas de hacer política, sino, al contrario, la de un reforzamiento autoritario del partido, así como en la dinámica general de la relación Estado/sociedad.

Las vías para ese reforzamiento fueron el incremento de la subordinación del partido al líder carismático, con la modificación de los Estatutos que otorga al Dr. Balaguer la facultad de escoger los candidatos a Senadores, Diputados y Síndicos; así como las leyes agrarias, la Cruzada de Amor y la no rotación y división de los mandos militares, en relación de fidelidad con el Presidente.²³

Bloqueando las posibilidades de participación democrática interna, el PR ocupa crecientemente un lugar subordinado en el sistema de poder balaguerista, lo cual erosionó su base de masas y sus posibilidades de articular los grupos que emergían del proceso de modernización y desarrollo del capitalismo: mientras la sociedad se modernizaba, el PR no sólo continuaba con las "viejas" formas de hacer política, sino que las fortalecía. El resultado no podía ser sino un efecto de paralización y aislamiento, el cual ocupa una posición relevante en la explicación de los "factores" que profundizaron la crisis de representatividad del régimen desde mediados de los años 70.

En lo que respecta a su funcionamiento dentro del sistema de poder balaguerista, el PR no se constituyó en torno a la discusión ideológico-programática. Fue, por el contrario, un transmisor de la palabra del líder, que aparece como revelación. El líder encarna el Saber y la experiencia, y el partido debe confirmar y propagar su Verdad. Como dispositivo organizativo, el PR participa del discurso del líder a través de su adoración, esto es, como parte activa de los ritos políticos que sacralizan la autoridad. Después de todo, el partido es el líder, y no la colectividad.

Ahora bien, el funcionamiento del PR más como brazo del gobierno que como organizador de la sociedad civil, si bien no estu-

vo ligado a la extensión de la ciudadanía, ni a la constitución de las clases modernas como sujetos de acción política -su selectividad se dirigió hacia el campesinado, en continuidad con las formas autoritarias y caudillistas de la cultura política dominicana- sí estuvo directamente vinculado a la ampliación de la burguesía a través de uno de los medios menos novedosos de la política local: "nuevos ricos" emergen durante este período a partir de su inserción como parte constitutiva o relación directa con la alta burocracia civil y militar, ligada estrechamente al control de la cúspide partidaria.

Así, pues, el PR, durante el período en que se configuró como partido de gobierno no sólo no propició una ruptura con las formas de hacer política de la tradición autoritaria, sino que inscribió directamente en la reproducción de una continuidad con las formas políticas tradicionales, a partir de su funcionamiento como dispositivo de una unidad, de un orden político autoritario y carismático.

Respecto al PR, la historia y configuración del PRD es sustancialmente distinta. ¿Hasta dónde, sin embargo, sus formas de hacer política establecen una ruptura con la tradición del autoritarismo y el caudillismo? Tal es la pregunta que nos proponemos examinar.

El PRD: El poder y la historia invertida

Aun y cuando el disciplinamiento organizativo de la sociedad, y particularmente de las clases y grupos populares urbanos, fue una estrategia exitosa del sistema de poder balaguerista, las formas de resistencia y lucha que enfrentaron dicha estrategia fueron múltiples y permanentes.

Y es que la acción del Estado no se efectúa sobre una sociedad muerta. Sus efectos de poder se inscriben en una sociedad cuyo proceso histórico inmediatamente anterior constituye el más intenso período de organización y politización de las clases populares urbanas.

Entre las luchas y resistencias anteriores a 1965, y las luchas y resistencias de la postguerra, específicamente de la década de los años 70, encontramos sin embargo profundas diferencias. La multiplicidad organizativa de la sociedad civil que emerge a la caída del trujillismo no tuvo relación de continuidad con la sociedad civil de los 70. La reestructuración autoritaria del balaguerismo cortó el proceso de formación de las clases y grupos populares urbanos como sujetos de acción política, reduciendo drásticamente sus espacios y formas de organización. Desvertebrado el mundo organizativo sindical y arrinconadas las organizaciones de izquierda por su caracterización como "ilegalismos", la reestructuración au-

toritaria revierte el proceso organizativo contra el cual opera. No sólo por la acción del Estado, sino también por obra de sus propias políticas, los sindicatos y partidos viven un intenso proceso de fragmentación y disgregación.

Las luchas por los derechos de ciudadanía se concentran organizativamente en el principal partido de oposición al régimen balaguerista, el cual ocupa las principales áreas del reducido espacio democrático existente.

No obstante, hay que introducir aquí una importante precisión. La agregación de las masas en y a través del PRD refiere la profunda relación de este partido con las luchas por la ciudadanía, por las reformas sociales y económicas, su articulación con el tramado simbólico de los sectores populares y su inserción en la apropiación de lo nacional por lo popular. El "mito fundacional" de esa práctica que colocó al PRD como parte constitutiva de la historia del pueblo-nación y le otorgó una centralidad en la constitución político-democrática del pueblo, fue el nexo golpe de Estado de 1963 y guerra civil de 1965.

Sin embargo, la supervivencia del PRD a pesar de la reestructuración autoritaria del balaguerismo, y del disciplinamiento organizativo que ella instauró, y más aún, la captación del espacio de las "presiones hacia la democratización" dentro del régimen balaguerista, se relaciona directamente con las transformaciones que el concepto de democracia presenta dentro de la práctica de este partido.

Nos proponemos señalar que, frente a la tradición del autoritarismo y el caudillismo, esto es, respecto a la cultura política pre-democrática, la historia y configuración del PRD es ambigua. Primero, porque toda esa historia está atravesada por una tensión entre la canalización de las presiones sociales en torno a la participación, los derechos de ciudadanía y la representación colectiva, por una parte, y la agregación amorfa de las "masas" dentro del partido y en torno a un liderazgo carismático, el del Dr. Peña Gómez.

Segundo, porque una periodización de las transformaciones del PRD que insista en que su constitución como partido gobernante en 1978 plantea una redefinición sustancial de sus relaciones con lo popular y democrático, podrá dar cuenta del reforzamiento de los elementos autoritarios en el PRD-gobierno y de su progresiva continuidad con las formas no democráticas de hacer política.

La historia del PRD se imbrica con la emergencia de los sectores populares como conquistadores de los derechos de ciudadanía, y es por tanto parte de la configuración política del pueblo. El año 1978 es el hito en que las presiones hacia la democratización

reestructuran la relación entre Estado y Sociedad en los términos de una democracia liberal.

Pero la relación entre las luchas por la democracia y el vínculo partido-sociedad presenta, desde su momento constitutivo, límites a situar. Entre ellos: a) una concepción fundamentalmente ética de la democracia, caracterizada por valores genéricos (justicia social, libertad, soberanía) no traducidos a análisis concretos y pautas de acción específicas (política económica, estructura y carácter de la representación política, proceso de toma de decisiones, modelo de Estado, etc.); y b) una relación externa con las clases populares organizadas, particularmente con la clase obrera. Estas clases no participan como representación de colectividades en el interior de las estructuras de partido, sino que sus individuos participan en tanto que "ciudadanos", esto es, de manera genérica y amorfa.

El líder y el partido interpelan al "pueblo" o a "las masas". Y en este proceso de politización e integración de las masas, la institucionalización del partido es mínima. Más que frente a un modelo de sociedad por construir, el partido moviliza grupos sociales en contra de. Más que de creación, es un partido de oposición. Canaliza presiones democráticas, pero presiones democráticas genéricas.

En ese contexto, el proceso de formación de una determinada voluntad popular tiende a producir una mitologización del líder, que "representa" esa voluntad. En esta configuración, la mediación específica del secretario general del PRD durante largos años, el Dr. José Francisco Peña Gómez, constituye un ejemplo de interpe-lación de los sectores populares sumamente significativo. Su negritud y origen social, contrastante con su conversión en el líder democrático más importante de la sociedad dominicana, esto es, con su ascenso social, entra en oposición con las ideologías racistas tradicionales, así como con el espíritu excluyente de los grupos dominantes.

Su discurso tiende a autoconfigurarlo en términos mesiánicos. El líder se presenta como el hombre salvado de la muerte, como el Moisés moderno que, recogido por una familia de bien, está predestinado a cumplir una misión liberadora respecto al pueblo dominicano, que es también un pueblo de Dios.

Ha sido evidente, durante dos décadas, la eficacia política de este mito, cuyos componentes están ligados no sólo a la religiosidad popular, a símbolos y valores nacionales, sino también a la movilización del pueblo en torno a los derechos de ciudadanía. Así, y a diferencia de Balaguer, el liderazgo carismático de Peña Gómez, se constituye como un mito de liberación de los sectores

populares. El representa la tierra prometida, las expectativas de participación y ascenso del pueblo, las esperanzas de progreso y realización del hombre común.

Este liderazgo carismático, si bien se emparenta con la tradición caudillista, posee componentes específicos que lo hacen ambiguo en sí mismo. Porque, en efecto, si bien apela a su autoridad y predestinación, interpela a las masas para su participación (aun y cuando esté subordinada al liderazgo) y para la conquista de los derechos de ciudadanía.

El liderazgo carismático de Peña Gómez ha sido, así, autoritario y democrático a la vez: esta tensión lo constituye, recorriendo toda su historia. Empero, ahí estará su originalidad y fuerza, como también sus límites y sus condiciones de reversibilidad.

El mito de liberación está unido a la creación de expectativas populares, a la organización y movilización de las masas en torno a un futuro mejor. Pero el futuro ha llegado, y ha sido otro. La reproducción del poder y de la sociedad existente por parte del PRD, que desde 1978 se convierte en partido de gobierno, ha esfumado su funcionamiento como canalizador de expectativas. El mito se revierte contra sí mismo. Lo que ayer las masas consideraron como promesa, hoy lo consideran como traición.

Ahora bien, el ciclo de erosión del liderazgo carismático de Peña Gómez, que se perfila en la década de los 80, está indisolublemente unido a las transformaciones históricas del PRD, particularmente a su constitución como partido de gobierno de 1978. En este sentido, puede esbozarse una propuesta de periodización para el estudio de las transformaciones del PRD y su relación con la sociedad.

a. La década de 1960 contiene su desarrollo como partido popular urbano, bajo las banderas de una democracia interrumpida por el golpe de Estado de 1963. Si bien dicho golpe lo desplaza del Estado, quebrando su continuidad como partido de gobierno, profundiza su relación con lo popular y convierte el "retorno a la constitucionalidad" en una cuestión nacional. Su discontinuidad como partido gubernamental permite la acentuación y radicalización de su condición de partido popular.

En este período, el PRD se configura como un partido policlasista articulado fundamentalmente a las capas medias de bajos ingresos, la pequeña burguesía, algunos sectores obreros, y a los desempleados urbanos. Estas clases y sectores o grupos no se estructuran, sin embargo, como colectividad de intereses, sino que tienen una presencia individualizada en el interior del partido.

Durante todo este lapso, el PRD constituye una alternativa

política intermedia, con fuerte tendencia al uso de medios violentos, frente a la ilegitimidad de la dirección autoritaria del Estado, pero su concepción de sociedad, sin embargo, acepta buena parte de los fundamentos del orden establecido. Su lucha se desarrolla, más bien, en torno a la legalidad, la legítimidad y la democracia; lucha que, no obstante, lo enfrenta al autoritarismo del "bloque" de poder.

b. Desde principios de la década de 1970 hasta 1978, se verifica una desradicalización del proyecto político que acentúa los elementos liberales de la concepción democrática del PRD, en conjunción con la construcción de una relación continua con "los liberales de Washington" y su adscripción formal a la Socialdemocracia.

Esta transición, en la que las transformaciones del PRD crean las condiciones para su ascenso al poder del Estado no se caracteriza por una institucionalización de la presencia y la participación de las clases según el modelo socialdemócrata. La desactivación de la clase obrera en el contexto nacional, por el contrario, disminuye su papel en el partido. Y la aproximación creciente a sectores empresariales, no encuentra una participación orgánica significativa por parte de las clases populares. La movilización de "las masas" sigue siendo la base de apoyo del esquema y el funcionamiento partidario del PRD.

La inserción del partido en la Internacional Socialista no se traduce en una configuración orgánica que reproduzca el modelo tripartita empresariado-burocracia-clase obrera propio de la socialdemocracia, ni tampoco genera la profundización de la cuestión programática.

Lo que resalta, en este lapso, es la confluencia progresiva del PRD y los sectores modernizantes de la burguesía dominicana, en torno a un esquema liberal que permita la rotación de las élites y disminuya la privatización del Estado propia del "anillo" balaguerista. Por lo que el cuestionamiento de lo establecido insiste más en el autoritarismo y los derechos de ciudadanía que en un proyecto global de transformaciones de la sociedad dominicana.

c. A partir de 1978, el nuevo ciclo histórico del PRD se caracteriza a partir de su dinámica como partido de gobierno. El ascenso del PRD se configura sobre la base de por lo menos tres grandes aspectos de la sociedad dominicana del momento: a) la disgregación y desorganización de la sociedad civil, fruto de la reestructuración autoritaria del balaguerismo; b) la presencia popular en el interior del partido, que se estructura como masa y no como empresariado y de los Estados Unidos, en torno a una desradicalización progresiva del PRD y a una negociación del Poder con el PR. El contexto de estos "factores" es el de una profundización de

la crisis económica que, sin cambios importantes en el modo de acumulación, frena sustancialmente las posibilidades de redistribución del ingreso.

La gestión de la sociedad dominicana, sin haber desarrollado transformaciones básicas en la dinámica del capitalismo, funda una contradicción en el desarrollo histórico del PRD: aquella existente entre la continuidad de una base de masas expresada en un programa de cambios sociales, y la continuidad del partido como reproducción del Estado y el orden vigentes.

De su papel crítico, movilizador e incrementador de la participación política popular, el PRD ha tenido que desplazarse a un papel de control, regulación, neutralización y eventual represión. Estos desplazamientos y contradicciones, vigentes en todo partido de masas que se transforma en gobierno con la práctica de conservar lo existente, se agudizan en una economía cuya estrechez y crisis obstaculizan seriamente la realización de cambios amplios en el modo de vida de los grupos populares.

La erosión de su base de masas, las interferencias de los "grupos de presión" ligados al ejercicio del poder, la inexistencia de un grado de organización popular y obrera que actúe como presión democratizadora, la profundización de la crisis de producción, el sistema de compromisos desarrollado no sólo con sectores empresariales, sino también con los sectores intermedios que focalizan al Estado como su campo de movilidad social en una economía de oportunidades escasas, han convertido al partido en una gama de intereses enfrentados en torno a la lucha por la apropiación del poder del Estado. Los resultados son los de una profunda imposibilidad de racionalizar el Estado, y por el contrario, la potencialización de la hipertrofia del Estado, la dualidad de funciones, la diversidad de grupos de intereses, áreas de influencias, contraposición de poderes y multiplicación de los impasses en el ejercicio del poder.

El Estado deviene una instancia paralizada por las presiones corporativas de los grupos de poder, inmersa en un sistema de compromisos que, dada la imposibilidad de redistribución del ingreso sin transformar la sociedad existente, se traduce en la expansión del clientelismo como forma de legitimación no democrática, como inclusión individual de los sectores de base, y como privatización del Estado. La espiral del clientelismo ha situado la "lucha de tendencias" como una lucha por el reparto del pastel, como una lucha en torno a bienes escasos que pulveriza la fragmentación que ha caracterizado hasta ahora a aquellos partidos cuya unificación no se sustenta o no puede sustentarse más en la autoridad del jefe.

Así, pues, respecto a la tradición de la autoridad y el caudillo, el PRD se ha insertado en la vida política dominicana en una relación de continuidad-discontinuidad de carácter extremadamente complejo y sujeta a importantes desplazamientos históricos. Esa continuidad-discontinuidad se ha verificado en torno a una tensión entre el liderazgo carismático, el escaso desarrollo orgánico del partido, y la presión democratizadora que lo ha configurado como partido popular.

Sin embargo, en los años 80, las formas de continuidad con esa tradición parecen haberse quebrado con el deterioro del liderazgo y la capacidad de interpelación del PRD y del Dr. Peña Gómez. Empero, esa crisis de las formas tradicionales de la autoridad y el caudillo, no se vincula con la existencia de un proceso de institucionalización y democratización del partido. El discurso peñagomista de 1979, en el cual se insistía en importantes transformaciones estructurales del PRD², no tuvo solución de continuidad. Y la coyuntura de la XI Convención, que eligió al Dr. Jorge Blanco como candidato a la presidencia, aun y cuando fuera una de las experiencias de participación más profundas de la historia dominicana, se cerró con el ascenso de su tendencia a la dirección del Estado y la ejecución de una política económica conservadora y autoritaria.

La crisis de la tradición de la autoridad y del caudillo en el PRD³ se relaciona más con un deterioro de sus bases de apoyo popular que ha erosionado las jerarquías y los valores de autoridad a partir de la crisis del liderazgo carismático del Dr. Peña Gómez, fundado en la fe de un porvenir que para las masas ha resultado decepcionante.

No obstante, el PRD de los años 80 presenta sustanciales niveles de continuidad con el otro lado oscuro de la luna: la fragmentación de un partido cuyas formas de inclusión política se reducen de más en más al clientelismo. Este ha sido, siempre, el teatro que prepara el ascenso del autoritarismo, el huevo de la serpiente.

Para un final que parece no acabar nunca

Hoy, a mediados de la década de los 80, la evaluación de los dos grandes partidos de masas de la sociedad dominicana, no puede ser más oscura. Partidos conservadores, ligados a la conservación de lo existente, para ser poder han dejado de ser alternativas, precisamente ahora, cuando la continuidad con el pasado, cuando el presente como proyección del pasado, no hace sino agudizar una crisis cuya magnitud es inversamente proporcional a un programa de cambios.

Los dos grandes partidos del orden parecen vivir de espaldas

al tiempo. Uno, con la tradición de la autoridad y el caudillo, el otro, con la tradición de la fragmentación y el clientelismo; ambos reviven, a veces como tragedia, a veces como caricatura, la historia que no acaba nunca. ¿Será también nuestra modernidad un eterno retorno?

NOTAS

1. Véase, para esta problemática, el sugerente texto de Enriquillo Sánchez, *El pensamiento tradicional dominicano*. CERESD, 1984. (Mimeo).
2. "On Functional Groups, Fragmentation, and Pluralism in Spanish American Political Society". En: H. Wiarda ed. *Politics and Social Change in Latin America*. The University of Massachusetts, 1974.
3. Ramonina Brea. *La formación del Estado capitalista en R. D. y Haití*. Santo Domingo: Ed. Taller, 1983. p. 87.
4. Esta conceptualización se relaciona con la lectura de un texto de Norbert Lechner: *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*. Chile: FLACSO, 1984.
5. Véase esta problemática en Ramonina Brea. *La formación del Estado capitalista en República Dominicana y Haití*.
6. El concepto es de N. Lechner. *La crisis del Estado en América Latina*. El Cid ed. 1977.
7. Véase Howard Wiarda. *Dictatorship, Development and Disintegration*. v.III, c. 21. University of Massachusetts, 1975.
8. Luis Salvador Peguero. *La personalidad de Rafael Leonidas Trujillo*. Discursos radiales.
9. N. Lechner. *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*.
10. *Memorias del Partido Dominicano*, 1940. p. 35.
11. Véase el concepto de Michel Foucault. *Vigilar y castigar*. México: Siglo XXI, 1976.
12. Luis Salvador Peguero, HIX, 23 de abril de 1935.
13. Samuel Huntington. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968. p. 89.
14. Cfr. Ramonina Brea. *Autoritarismo y el proceso de democratización en la República Dominicana*. Inédito. 1985. p. 7.
15. Ramonina Brea. *Autoritarismo y proceso de...* p. 9.
16. Véase esta conceptualización, unida al conocimiento de las clases como proceso, en Adam Przeworski, "El proceso de la formación de clases". *Rev. Mexicana de Sociología*. No. extraordinario 1979.
17. José Oviedo. *Política y acción social en la clase obrera dominicana*. CERESD. Mimeo. 1984.
18. José Oviedo, "El balaguerismo o la reestructuración autoritaria". *Política y acción social en la clase obrera dominicana*.
19. Para este concepto, en relación con el balaguerismo, véase a R. Brea. *Autoritarismo y proceso de Democratización*.
20. *Naboth's Vineyard*. London: Payson & Clarke, 1928. p. 420.

21. Joaquín Balaguer. **Mensajes presidenciales**. Barcelona: M. Pareja, 1976. pp. 93-94.
22. Véanse los análisis de A. Gramsci en torno al **Risorgimento** italiano, en **Pasado y Presente**. Juan Pablo ed., pp. 82-83.
23. Véase Víctor Gómez Bergés. **Las causas de dos derrotas**. 1985.
24. **10 Discursos**. Ed. PRD. 1979.